

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, Diecisiete (17) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de Tutela**
Radicación: **2022-00879**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por el señor **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO** en contra de **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**, en adelante **ANT**.

II. ANTECEDENTES:

2.1.- HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta el accionante que, el día 1 de noviembre de 2022 al correo electrónico atencionalciudadano@ant.gov.co presentó derecho de petición de información ante la Agencia Nacional de Tierras, la petición fue suscrita y enviada a través del correo electrónico de la hija de la accionante Gloria Osorio Sayeh, quien recibió un correo con el Número de radicado: 20226201400472

2.1.2.- Señala que a través del derecho de petición de la referencia solicitó:

“1. RESOLUCION 20203100293016 DEL 22-12-2020 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE BOGOTA D.C.

2. MEDIDA CAUTELAR: 0448 INICIACION DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DESLINDE DE TIERRAS DE PROPIEDAD DE LA NACION

3. RESOLUCION 28772 DEL 18-12-2020 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE BOGOTA.

Lo anterior teniendo en cuenta que soy titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble identificado con el Número de Matrícula: 064-32212, donde aparece registrada una medida cautelar de la Agencia Nacional de Tierras, la cual no me fue notificada.

De igual forma, solicité se me indicaran el alcance de dicha medida y si existen alguna prohibición vigente sobre el bien inmueble arriba señalado, en especial referente a compraventa.

Además, se señaló que recibo respuesta a la petición en los correos electrónicos leilasayehacevedo@gmail.com y gloriaosayeh@yahoo.com.mx Solicité además que cualquier notificación y/o comunicación respecto a ese proceso me sea enviada a los dos correos ya indicados.

Se anexó copia simple de los siguientes documentos: - Cédula de Ciudadanía. - Certificado de Tradición.

2.1.3.- Indica que, que ha pasado más de un mes, sin embargo, la Agencia Nacional de Tierras no ha emitido respuesta. Consultado en la página de dicha entidad con el número de radicación, se indica que el estado actual es En trámite.

2.2. PETICIÓN:

Solicita:

“1°. Que se me tutelen mi derecho fundamental de petición.

2°. Que se ordene a la Agencia Nacional de Tierra a responder mi petitorio en los términos señalados por la ley y jurisprudencia, es decir, de fondo, de manera clara, completa y suficiente, y comunicada a los 2 correos indicados en la petición.

3°. Que se ordene a la Agencia Nacional de Tierras que se abstenga de incurrir en evasivas sin justificación al acceso a la información.”

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 15 de diciembre de 2022 se admitió la acción constitucional (archivo digital 08), en el que se ordenó notificar a las partes, y solicitarle a la entidad accionada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días, así como también vincular al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

3.1. RESPUESTAS:

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (archivo digital 11): se opuso al amparo alegando la carencia actual de objeto por hecho superado con fundamento en que, una vez analizado el oficio que requiere y la demanda de tutela, la Oficina Jurídica procedió a requerir a través de memorando radicado No 20226201400472 a la Subdirectora administrativa y financiera, La cual remitió por competencia a la subdirectora jurídica a través del memorando 20226200381753, para lo cual informo a través de oficio No 20223101690401, dio respuesta a la petición, que, actualmente la Subdirección de Seguridad Jurídica de la ANT se encuentra adelantando el Procedimiento Único contemplado en el Decreto 902 de 2017 respecto de los predios denominados LOTE 1 DIAMANTE, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 064-25872 y “LOTE No. 2”, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 142-20559, ubicados en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar.

Así mismo, indicó que, una cosa es que resulte violado el derecho de petición cuando no se resuelve material y oportunamente acerca de la solicitud presentada y otra muy distinta que, ya respondido lo que la autoridad tiene a su alcance como respuesta, el peticionario aspire a que se le conceda forzosamente y de manera inmediata algo que resulte actualmente imposible.

Que se ha garantizado el cumplimiento del núcleo esencial de la petición, pues se emitió una respuesta de fondo integralmente, respondiendo todos los interrogantes de la solicitud dentro del término establecido y notificando al usuario al correo electrónico autorizado.

Por último, que la Agencia Nacional de Tierras no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la señora LEYLA MARIA ISABEL, pues resolvió la petición por ella formulada, de fondo, en forma clara y congruente, de acuerdo con el precedente constitucional exigible.

Indica que En este orden de ideas, atendiendo a las consideraciones expuestas anteriormente, se evidencia que en el presente caso no existe ninguna conducta concreta, activa u omisiva, que haya podido concluir con la supuesta afectación de los derechos fundamentales alegados por el peticionario, y a partir de la cual se puedan impartir órdenes para la protección, o hacer un juicio de reproche a la entidad accionada; motivo por el cual se solicita al despacho negar por improcedente la presenta acción constitucional.

En consecuencia, el derecho fundamental de petición en esta oportunidad se encuentra satisfecho, y con dicha respuesta se entiende que se ha contestado de fondo al petitorio del señor señora LEYLA MARIA ISABEL, razón por la cual, en el presente caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a pesar de encontrarse debidamente notificado no emitió pronunciamiento alguno.

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes,

los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa:

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud”*.

En el caso bajo examen, la señora **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO** acudió a la acción de tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales de petición e igualdad, los cuales afirma están siendo conculcados como consecuencia de la falta de una respuesta fondo por parte de la entidad accionada a su solicitud. Por lo anterior, se encuentra legitimada en la causa por activa para presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva

Como quiera que la legitimación pasiva atiende a la capacidad legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”* o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto *sub-judice*, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**, a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta de fondo a su petición.

- Inmediatez

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que *“La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”*.

En el presente asunto, se tiene que, entre la fecha de radicación de la petición por parte de la accionante ante **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**, 1 de noviembre de 2022, y en la que presentó la acción constitucional, 12 de diciembre de 2022 (archivo digital 06), han transcurrido más de veinte (20) días por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: *“(...) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente”*.

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte de la entidad accionada a la petición que elevó el 1 de noviembre de 2022, lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

4.3. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)”*. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

“1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

- (i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;*
- (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;*
- (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;*

(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable".

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

"la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional "consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada". Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible, "pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución"

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: "(...) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)".

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

V. CASO EN CONCRETO:

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** vulneró los derechos fundamentales de petición de la señora **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO** respecto de la solicitud que radicó el día 1 de noviembre de 2022.

5.2.- Se encuentra incorporada al expediente la petición elevada por el accionante ante **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** el día 1 de noviembre de 2022, solicitando:

"(...)

Señores
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
atencionalciudadano@ant.gov.co
Bogotá

Referencia: Derecho de petición.

Cordial saludo;

La suscrita LEILA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO identificada con cédula de ciudadanía número 33198912 expedida en Magangué Bolívar, acudo ante usted, en virtud del derecho fundamental de petición consagrado en el Artículo 23 de nuestra Constitución Política Nacional y demás normas que lo regulan, para solicitarle copia digital de los siguientes documentos:

1. RESOLUCION 20203100293016 DEL 22-12-2020 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE BOGOTÁ D.C.
2. MEDIDA CAUTELAR: 0448 INICIACION DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS DESLINDE DE TIERRAS DE PROPIEDAD DE LA NACION
3. RESOLUCION 28772 DEL 18-12-2020 AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS DE BOGOTÁ

Lo anterior teniendo en cuenta que soy titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble identificado con el Número de Matricula: 064-32212, donde aparece registrada una medida cautelar de la Agencia Nacional de Tierras, la cual no me fue notificada.

De igual forma, solicito se me indique el alcance de dicha medida y si existen alguna prohibición vigente sobre el bien inmueble arriba indicado, en especial referente a compraventa.

Recibo respuesta a la presente petición en los correos electrónicos leilasayehacevedo@gmail.com y gloriassayeh@yahoo.com.mx Solicito además que cualquier notificación y/o comunicación respecto a ese proceso me sea enviada a los dos correos ya indicados.

Se anexa copia simple de los siguientes documentos:

- Cédula de Ciudadanía.
- Certificado de Tradición.

Agradezco su atención;

Atentamente;


LEILA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO.

(Página 3 y 4, archivo digital 03)

5.3.- Teniendo en cuenta lo anterior, refulge para este Despacho Judicial que en el presente caso sería el caso concluir que se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que el derecho fundamental de petición invocado por **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO** en su escrito de tutela, al momento de proferirse este fallo ya no se encuentra conculcado, según la respuesta suministrada por la accionada por lo que una intervención del juez constitucional en aras de garantizarlo resultaría ineficaz.

Sin embargo, a pesar de que la entidad accionada informó que dio respuesta a la petición de la aquí accionante, no se allegó las constancias de envío a la dirección electrónica reportada como dirección de notificación.

5.4.- Sin embargo, a pesar de que la entidad accionada informó que dio respuesta a la petición de la aquí accionante, no se allegó las constancias de envío a la dirección electrónica reportada como dirección de notificación.

Por lo anterior, resulta palmario concluir que la entidad demandada conculcó el derecho de petición de **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO**, al no allegar constancias que se hubiese remitido a la accionante la respectiva respuesta.

En consecuencia, se ordenará a **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** que, en el término perentorio e improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, remita al accionante la respuesta a su derecho de petición a las direcciones electrónicas y físicas de notificación señaladas en el derecho de petición por **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO**.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley”,

VI. RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER la acción de tutela impetrada por **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO**, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a **LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS** que, en el término perentorio e improrrogable de 48 horas, contado a partir de la notificación de esta sentencia, remita al accionante la respuesta a su derecho de petición a las direcciones electrónicas y físicas de notificación señaladas en el derecho de petición por **LEYLA MARIA ISABEL SAYEH ACEVEDO**.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

CUARTO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the printed name of the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

AP